

Moisés Islas

Ayotzinapa: el proceso político del movimiento y las nuevas formas de participación política en México

INTRODUCCIÓN

Los movimientos sociales son fenómenos de contienda política (Tilly y Wood, 2009), esto es, que mediante un repertorio de acción, ciertos individuos buscan llevar a cabo un cambio en la forma de organización política de una sociedad específica. Asimismo, los movimientos tendrán la capacidad de afectar a ciertas élites y/o grupos de interés, por lo cual es previsible algún tipo de respuesta por parte de estos grupos. Los resultados de un movimiento — políticos, sociales, culturales, etcétera — dependerán principalmente de la manera en que se den estos acontecimientos y del tipo de régimen en el cual se lleven a cabo. El análisis de los movimientos sociales buscará entonces darle respuesta a varias cuestiones: ¿qué tipo de régimen permite la aparición de un movimiento social?, ¿cómo surgen los movimientos sociales dentro de un sistema de organización política?, ¿a partir de qué motivaciones específicas el individuo decide formar parte de la colectividad para participar políticamente?, ¿qué es lo que en algunos casos impide a los ciudadanos ponerse en acción?, ¿cómo reacciona el Estado ante un movimiento social?, ¿qué resultados puede obtener un movimiento dentro de un régimen?

Es posible hallar respuesta a estas cuestiones cuando visualizamos a los movimientos sociales como un proceso político organizado dentro de un régimen político determinado.

El estudio de dicho proceso puede dividirse en cinco dimensiones:

1. El contexto histórico del régimen en el que surge el movimiento
2. La percepción que los ciudadanos tienen del sistema político, así como de las amenazas y oportunidades que la acción colectiva pueda representar
3. Los hechos catalizadores del movimiento, la acción y los repertorios de protesta
4. La reacción del Estado ante un movimiento social
5. Los resultados del movimiento

En este trabajo analizaremos uno de los movimientos sociales del siglo XXI que más impacto ha tenido en la vida pública de México: el movimiento por los 43 desaparecidos de Ayotzinapa. Tomando este hecho como punto de partida reflexionaremos acerca de los hechos que arrastraron al país a la crisis actual: el fracaso de la transición hacia la democracia, las formas de disolución social a partir de la guerra contra el narcotráfico y la sistematización de la represión.

En la primera parte abordaremos los principales antecedentes que condujeron al sistema institucional mexicano al empleo de las viejas prácticas del otrora partido hegemónico. A partir de un breve análisis de la estrategia de seguridad calderonista expondremos la crisis de derechos humanos experimentada por este país, así como la construcción de un sujeto social que interactuó con el gobierno y que fue traicionado por la élite de poder.

En un segundo momento conectaremos el retorno del Partido Revolucionario Institucional (PRI) con la crisis política en México, el crecimiento del descontento social y el empeoramiento de la crisis de derechos humanos. Veremos cómo los niveles de corrupción e impunidad fueron reduciendo el sujeto social que se construyó en el sexenio de Calderón, hasta revivir una vez más en las víctimas el sentimiento de soledad. Es precisamente en ese contexto en el que detona el movimiento de Ayotzinapa como

una forma de denuncia, de resistencia y de unificación social «desde abajo».

En la tercera parte analizaremos los alcances y los aportes del movimiento respecto a las crisis.

DESARROLLO

I

La transición interrumpida

Es imposible hablar de democracia en México sin pensar en las muchas deficiencias que ha presentado la utilización del término, así como en los escuetos «avances» y notables retrocesos que se han dado desde la llamada transición en el año 2000 hasta la fecha. Durante este tiempo, múltiples han sido los hechos con tintes autoritarios que prueban que el régimen mexicano no responde a las características de una democracia en el amplio sentido de la palabra.

La evasión por parte de Vicente Fox Quesada —candidato y ganador por el Partido Acción Nacional (PAN) a la presidencia de México— de la responsabilidad histórica de las fuerzas de oposición para hacer frente a las viejas prácticas priistas y a los actores influyentes antidemocráticos es el primer indicador de que en México no ha concluido la transición democrática (Tuckman, 2015). La flacidez de su gobierno hizo que el impulso democratizador perdiera gran parte de su fuerza. Por otra parte, fue evidente su incapacidad para promover una verdadera reforma de Estado que indicara una ruptura con el viejo régimen autoritario.

Además de no haber impulsado el quiebre con las viejas prácticas políticas, Fox cerró su administración con un intento de desafuero en contra del principal candidato de la izquierda a las elecciones del 2006, Andrés Manuel López Obrador. El posible triunfo del candidato de izquierda significaba una amenaza para la continuidad de la empresa foxista, quien había acrecentado los negocios con Estados Unidos, dándole así continuidad al modelo económico implementado por los tecnócratas casi dos décadas atrás (Ceja, 2013). Sin embargo, la popularidad del entonces perredista y la gran movilización que se activó para exigir que el gobierno desistiera del proceso en su contra, lograron

que Andrés Manuel entrara a la contienda presidencial en 2006 como el candidato favorito.

Lo anterior reactivó una de las viejas prácticas priistas: el fraude electoral. Con el fraude de 1988 y la famosa caída del sistema como precedentes más cercanos, se da el sabotaje en 2006. Este hecho y la llegada de Felipe Calderón a la presidencia acabaron con la ilusión de que la democracia por fin había llegado a México. Las instituciones democráticas fueron puestas en duda y los logros que se habían alcanzado hasta entonces perdieron gran parte de su valor.

El terror y el Estado criminal

Ante la falta de aceptación de los ciudadanos a Felipe Calderón, este puso en marcha un mecanismo estratégico que le permitiría legitimarse. La declaración de la guerra contra el narcotráfico (problema que ha asediado a los mexicanos, sobre todo, a los estadounidenses, desde hace décadas), apenas unos días después del inicio de su administración, provocó que los niveles de inseguridad, que de por sí ya eran importantes, se hicieran alarmantes. El objetivo técnico fue la desarticulación de los principales cárteles del país, sin embargo, el poderío de estos complicó la operación al punto de sumir al país en una crisis de seguridad casi insostenible.

El terror que fue invadiendo a los ciudadanos provenía tanto de las bandas del crimen organizado como de las fuerzas armadas. Así, los impulsos de participación en los ciudadanos que pudieran estar inconformes con los procedimientos de la supuesta democracia quedaron casi anulados. Calderón logró que el miedo paralizara al país a base de una guerra absurda.

Una consecuencia directa de las guerras es la baja de civiles, por ello, tratados internacionales como el Estatuto de Roma forman una «ley de guerra» o «ética militar» que protege a los civiles de ataques deliberados de cualquiera de los bandos. Ahora bien, en México se reportaron 121 000 muertes violentas, relacionadas con la lucha contra el narcotráfico, tan solo en el sexenio de Calderón. Esta producción masiva de cadáveres no podía evitarse con la aplicación de tratados internacionales por el simple hecho de que México no estaba en una guerra con otro Estado-nación; lo que en este país se produjo fue una guerra civil cuyas consecuencias afectaron de manera directa

la vida cotidiana de las personas a través de la inseguridad. Salir a la calle en muchos estados de la República significaba correr el riesgo de ser arrestado, torturado, violado, secuestrado, desaparecido o asesinado.

A manera de respuesta defensiva el gobierno de Calderón criminalizó a las víctimas; todo el que moría a manos de las fuerzas del Estado estaba envuelto en actos de crimen organizado (Turati, 2012). Los seres humanos asesinados se convertían así en cifras, al tiempo que la impunidad crecía y la reparación de los daños a las víctimas se hacía inalcanzable. Ante este escenario de violaciones de los derechos humanos e impunidad, resulta escalofriante pensar que en marzo de 2011 el número de efectivos militares que se encontraban realizando «labores policiacas y de patrullaje» en todo México se estimaba superior a sesenta mil.

Es necesario reconocer que en la cifra oficial de 121 000 muertes relacionadas con la guerra contra el narcotráfico no se incluyen a las otras víctimas: los mutilados, los desaparecidos, los huérfanos, las viudas y los enfermos mentales. Se estima que por cada «ejecutado» hay tres lesionados, lo cual nos indica que alrededor de 363 000 personas sufrieron daños físicos y sobrevivieron (Turati, 2012: 42). De tal manera, lejos de solucionar el problema del crimen organizado, la narcoguerra de Calderón empeoró la situación. Sin embargo, no estaba dispuesto a modificar su estrategia, asegurando que más pronto que tarde llegaría la paz a nuestro país.

El hartazgo se materializó en marzo de ese año, cuando Juan Francisco Sicilia, hijo del poeta y crítico de la política mexicana Javier Sicilia, fue secuestrado y asesinado junto con otras seis personas en Cuernavaca, Morelos. El movimiento que se desencadenaría después es un importante precedente para las formas de participación colectiva y específicamente para el caso Ayotzinapa.

Respuesta social: Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad

Al igual que en otros miles de casos, las autoridades identificaron como posibles hipótesis del móvil para el asesinato de Juan Francisco el ajuste de cuentas del narcotráfico o la casualidad. Ante esta acción, con la que las autoridades se lavarían las manos, Javier Sicilia decidió salir a las calles para

exigir que se restauraran la paz y la justicia en el territorio nacional y que a las víctimas, entre las cuales estaba su hijo, se les devolviera la dignidad que se les había arrebatado al criminalizarlas.

Entablando un diálogo directo con el presidente, Sicilia y las víctimas esperaban una transformación impulsada conjuntamente. Sin embargo, Calderón le dio la espalda a los ciudadanos. No se le veía final a la guerra.

Aunque el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad logró darles voz a las víctimas, la paz nunca llegó, y hacia el final del sexenio las pruebas de que la estrategia de Calderón había fallado eran contundentes (Aguilar & Castañeda, 2012). La inhabilitación de capos importantes provocó la aparición de pequeñas organizaciones criminales. La corrupción de los policías a todos los niveles, así como del Ejército y la Marina, impidió que pudieran frenar la articulación de nuevos cárteles. La violencia y el número de muertos aumentó, mientras que la violación de las garantías individuales, los derechos humanos y los derechos de ciudadanía se hizo sistemática. El índice de impunidad de los crímenes relacionados con la guerra alcanzaba el 95%. Finalmente, la aprobación de los ciudadanos hacia la estrategia y hacia instituciones como el Ejército y la Policía Federal disminuyó en vez de fortalecerse.

Si en el comienzo de su gestión el exmandatario creyó que la guerra antinarco le permitiría legitimarse, se equivocó; los datos al final de su sexenio lo demuestran. La sociedad juzgó que la fallida transición hacia la democracia de Fox y el baño de sangre en el que Calderón sumió al país eran razones suficientes para cambiar el rumbo del México. Ante la traición de Calderón a los ciudadanos del MPJD, la oportunidad inmediata para llevar a cabo era la elección presidencial en 2012.

II

El arribo del no tan nuevo PRI

Doce años le bastaron al Partido Revolucionario Institucional (PRI) para aprender de sus errores, rearticularse y conseguir retomar la presidencia de la República. Con apenas un 38.21% de los votos a su favor, Enrique Peña Nieto, candidato por el PRI en coalición con el partido-satélite Partido Verde Ecologista

Mexicano (PVEM), es declarado ganador en una elección cuestionada por sus irregularidades durante la campaña electoral. ¿Cómo es posible explicar que el partido autoritario que gobernó durante setenta años al pueblo de México, y que fue derrotado con tanto trabajo y sacrificios, hubiera regresado con nuevos bríos a la silla presidencial?

El PRI no ganó en 2012 por presentar un nuevo proyecto de nación. Fue tanto la incapacidad del PAN para gobernar como la del PRD para consolidar una oposición fuerte, debido a las riñas entre las distintas facciones del partido, lo que posibilitó el retorno del PRI. En ese sentido podríamos considerar las elecciones de 2012 como una especie de plebiscito en el que se hicieron presente, por un lado, el voto de castigo hacia el PAN —el electorado panista buscó una derecha diferente—, y por otro, la tendencia de regresar al viejo régimen por parte de los priistas (AzizNassif, 2013). Además del comportamiento del electorado, el triunfo del PRI se puede explicar a partir de las múltiples irregularidades que le dieron ventaja al candidato tricolor, el apoyo mediático tendencioso y la compra de votos, por mencionar las más visibles.

En este contexto surge el movimiento *#YoSoy132*, conformado por estudiantes de la Universidad Iberoamericana. En un acto de campaña realizado dentro del plantel universitario, un grupo de estudiantes cuestionó a Peña Nieto acerca de las violaciones a los derechos humanos ocurridas en San Salvador Atenco en 2006, cuando él era gobernador del Estado de México. Ante los cuestionamientos el priista afirmó que se hacía responsable de esta operación y justificó el uso de la fuerza (y de las agresiones sexuales, los asesinados y las detenciones arbitrarias) diciendo que fue llevada a cabo en nombre del orden público.

La indignación ante esta respuesta se hizo viral y lo que comenzó como una protesta informal se transformó en un movimiento nacional que exigía la democratización de los medios de información. Sin embargo, aunque las repercusiones de *#YoSoy132* fueron importantes, las élites empresariales y políticas ya tenían elegido al candidato que impulsaría a la presidencia. Inclusive con el antecedente de Atenco, Peña Nieto era el favorito de las élites puesto que:

Para los sectores autoritarios [empresas legales e ilegales al igual que ciertas élites políticas] que ven en el uso de la

coerción un elemento imprescindible para la consecución de sus negocios, un gobernante que hace uso de ella es un buen gobernante. [...] En tiempos de transiciones políticas pactadas, a estos se les protege con el manto de la impunidad, el perdón y el olvido. (Ceja, 2015: 44-45)

Ante estas irregularidades las autoridades electorales mostraron mano débil, tanto en la realización de las investigaciones necesarias como en la ejecución de las sanciones pertinentes. Al mismo tiempo, se puso de manifiesto el alcance de las élites políticas y de los grupos empresariales, el poder de imponer su agenda y el sometimiento de las instituciones, exhibiendo la presencia y gran alcance de los poderes fácticos.

Para el politólogo Isaiah Berlin, la esencia de la política se encuentra en el conflicto. Es este factor el que permite a los seres humanos discutir a base de argumentos acerca de lo que es mejor para todos y así llegar a un acuerdo. Peña Nieto arrancó su sexenio reduciendo casi por completo el conflicto entre partidos mediante la firma del Pacto por México. Si antes se pensaba que el puente que unía los intereses entre el PRI y el PAN era tangible (recordemos que Fox no quiso terminar con las prácticas del viejo régimen), ahora al juego se sumaba el partido que hasta entonces había funcionado como una oposición real de izquierda, el PRD, y que entonces cambió su estatus al de una «oposición leal».

A partir de esta profunda inhibición del debate de lo público, Peña Nieto pudo darle continuidad al proyecto económico de corte neoliberal iniciado en 1988 por el tecnócrata Carlos Salinas de Gortari. Mediante la realización de un paquete de reformas estructurales antipopulares, el gobierno mexicano pretendía limpiar el terreno para que los empresarios (nacionales y extranjeros) pudiesen explotar los bienes del país sin ninguna traba. Para ello era necesario que el país atrajera inversionistas y un escenario de seguridad, tanto fiscal como física, es la mejor forma de hacerlo. Por lo tanto, Peña Nieto no solo alineó a los principales partidos políticos, sino que utilizó los medios de comunicación para limpiar la imagen violenta del país. Aunque los crímenes y la violencia seguían, los principales noticieros de México le daban cobertura a ridículos *reality shows*. Con la clase política de su parte y la sociedad desinformada, Peña Nieto reanudó el proyecto neoliberal.

Aun así, la reducción del conflicto no fue completa. Muchos fueron y siguen siendo los ciudadanos que han levantado la voz en contra de esta regresión del sistema político mexicano. Con la partidocracia revelándose en su máxima expresión, desde cada una de sus áreas, algunos ciudadanos se resistían a dejarse llevar hacia el despeñadero y buscaban formas innovadoras de participar, influir en lo político y hacer presión al gobierno desde abajo (Alonso & Alonso, 2015a).

Uno de los ejemplos más claros de esta resistencia han sido los periodistas que mediante artículos, libros, investigaciones, reportajes y documentales han denunciado la situación de crimen e impunidad en la que todavía se encuentra envuelto el país. Ante la resistencia el Estado ha hecho de todo para impedir que la información se divulgue.

Los jóvenes: amenaza de unos, esperanza de otros

Si hay un sector específico que ha podido impactar fuertemente en la política nacional, y que al mismo tiempo ha sufrido los embates del crimen organizado y del propio Estado, es el de los jóvenes. Por parte del crimen, reciben la «oportunidad» de convertirse en criminales. Aquellos que no entran dentro de las filas del crimen corren el riesgo de ser secuestrados y después vendidos o de morir simplemente por ser jóvenes, porque sus genes rebeldes y sus ganas de vivir son obstáculos para los planes de algún individuo con poder. Ante esto, lejos de ser apoyados por el Estado, muchas veces los jóvenes son olvidados por las instituciones y en no pocas ocasiones reprimidos.

Hasta el día de hoy, los jóvenes son la gran masa que conforma las filas de los cárteles. Hacia el 2010 alrededor de treinta mil menores de edad participaban en algún eslabón de la delincuencia, al tiempo que uno de cada diez delitos en México era cometido por adolescentes (Turati, 2012). Esta particularidad no se explica a partir de la naturaleza criminal de los individuos; la principal razón por la que deciden entrar a un cártel es su necesidad de pertenecer a un grupo, de sentirse parte de algo, de saber que de alguna manera son importantes. A esto hay que sumarle las jugosas e inmediatas ganancias que deja el narcotráfico.

El Estado, por su parte, ha seguido una estrategia más bien punitiva, dejando de lado la prevención; intervienen solo en

el momento en el que el adolescente infringe la ley, drogándose, asaltando para costearse una dosis o incluso cometiendo su primer asesinato. Las instituciones son insuficientes, hay pocas escuelas, pocos profesores con un sueldo miserable y los centros deportivos son prácticamente un foco del crimen debido al abandono en el que se encuentran. En cambio, los centros de detención juvenil están cada vez más poblados, lo que implica que, lejos de reincorporar a la sociedad a los jóvenes infractores, estos encuentren en el crimen una forma de vida.

Para los jóvenes que consiguen un puesto en la universidad el futuro es apenas un poco más alentador. Obtener una licenciatura significa luchar por puestos de trabajo inalcanzables o que están apartados de antemano para alguien más. Los trabajos les son negados por falta de experiencia, pero nadie les da un primer trabajo. Aquellos que consiguen un empleo se deben conformar con salarios precarios y (a partir de la reforma laboral de Peña Nieto) están siempre bajo la amenaza de un despido injustificado. La opción de una jubilación digna es cada vez más borrosa. El joven profesionalista pasa su vida sobreviviendo día tras día. En ese sentido, las oportunidades de un profesionalista no son muy distintas que las de alguien que no termina la primaria.

Los «ni-nis» (término relativo a los jóvenes que ni estudian ni trabajan) son la materia prima del crimen organizado, son los hijos de la ignominia y la crisis. Para ellos es natural que la economía no crezca y que los políticos roben. La violencia está cada vez más normalizada ante sus ojos y se convierte en una posibilidad de subsistir.

Por otro lado, los jóvenes con un grado de educación medio o superior buscan revolucionar su entorno, convertirlo en algo mejor, hacer de su mundo un lugar donde se pueda vivir dignamente; mediante innovadoras formas de participación tratan de cambiar el rumbo del país. Los jóvenes mexicanos representan la esperanza de un cambio, evidentemente, su participación no conviene a las élites de poder. Esta conducta ha sido repetitiva en la historia del país: el ejemplo más reciente es la desaparición forzada de 43 estudiantes de la Escuela Normal Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa. Hecho que fue perpetrado por las fuerzas del Estado en complicidad con el crimen organizado durante la madrugada del 26 de septiembre de 2014.

III

Hechos detonantes. La niebla se disipa

Después de siete años de guerra, el tejido social se debilitó al tiempo que la alineación de las condiciones estructurales bloqueaba las posibilidades de la solidaridad ciudadana. La niebla de la guerra impedía al ciudadano común diferenciar entre buenos y malos; intentar transformar aun el entorno inmediato, era considerado un acto riesgoso y hasta inútil. Tomar las armas para defenderse dejaba de ser una opción y se convertía en una necesidad.

La situación violenta del país no podía sostenerse más. La sociedad esperaba la llegada del viento que disipara la niebla para poder identificar a los malos y tomar acciones civilizadas que no produjeran más violencia. Ese viento llegó en la madrugada del 26 de septiembre de 2014. Los ciudadanos pudieron dilucidar quiénes estaban con ellos y contra ellos.

El 26 de septiembre de 2014 varios estudiantes de la Normal de Ayotzinapa tomaron algunos autobuses para ir a *botear*. Una parte del dinero recaudado sería destinado al mantenimiento del plantel educativo de la normal, deprimido debido a la falta de apoyo por parte de las autoridades. Otra parte sería destinada al viaje que los estudiantes realizarían para participar en la marcha conmemorativa del 2 de octubre, que se llevaría a cabo en la capital del país. Cuando los camiones en los que iban los estudiantes llegaron al municipio de Iguala, fueron agredidos por la policía municipal sin justificación alguna. Hubo disparos, golpes, insultos y detenciones. En el acto represivo murieron seis personas, tres de ellas estudiantes. Hubo también varios heridos y 43 estudiantes más fueron víctimas de desaparición forzada por parte de los agentes de policía. A uno de los jóvenes normalistas asesinados le arrancaron el rostro y la fotografía de su cadáver desfigurado fue difundida por Internet. La semilla de la incertidumbre y la desesperación había sido plantada junto con la de la perseverancia y la sed de justicia. Estas semillas germinaron y se expandieron por todo el territorio mexicano.

La poca información que se tenía acerca del paradero de los estudiantes indicaba que habían sido detenidos sin cargo alguno y no se había notificado dicha detención. La frustración aumentó al comprobarse que, además de la policía municipal, en el ataque

a los estudiantes también estaban implicados la Policía Federal y el Ejército. La situación fue evidente cuando investigaciones posteriores revelaron que detrás del operativo en contra de los estudiantes en Iguala había una red de corrupción y de filtración del crimen organizado en el gobierno. Las investigaciones indicaron que José Luis Abarca Velázquez fue el autor intelectual y quien dio la orden para «detener» a los estudiantes. Hasta el día de hoy la versión oficial lo hace responsable de la desaparición de los 43 jóvenes y de sus asesinatos.

Al vencerse los plazos fijados para la aparición con vida de los 43 compañeros, padres y normalistas comenzaron a organizarse para la búsqueda de los desaparecidos. Como resultado se produjo el descubrimiento de decenas de fosas clandestinas, aunque ninguno de los cadáveres ahí enterrados pertenecía a alguno de los 43 desaparecidos. Poco a poco se fue descubriendo que México es una enorme fosa común donde la impunidad es cosa de todos los días.

Por su parte, la sociedad comenzó a movilizarse. Miles de personas a lo largo de todo el país y de diferentes partes del mundo salieron a las calles a manifestar su indignación y repudio ante la situación. La putrefacción de los partidos políticos quedaba expuesta y ascendía hasta llegar al propio presidente Enrique Peña Nieto. La corrupción y el vínculo del gobierno con el narcotráfico que develó la investigación, así como los intentos por imponer una verdad ajena a la realidad por parte del cansado procurador de la República, Jesús Murillo Karam, les dieron a muchos ciudadanos mexicanos la información suficiente para no volver a creer en las instituciones de gobierno y buscar nuevas formas de convivir en sociedad, a partir de lo que rápidamente se transformó en un movimiento social muy diferente a los llamados «tradicionales», que tienen al Estado como interlocutor dialéctico.

Se trataba de un movimiento de nuevo tipo por su profundidad, extensión y alcances. [...] Fue impulsando la creación de gobiernos autónomos en varios municipios y se propuso poner en jaque las elecciones de 2015. Era un movimiento que no había sido amedrentado por la represión y mostraba mucha creatividad en sus acciones. Sus repercusiones internacionales no disminuían. [El movimiento] destellaba signos de esperanza por la creación de nuevas

formas de relaciones y de cambio social a fondo. Se había propuesto con parte del México agraviado constantemente por la dureza de la explotación y despojo capitalista, transformar el país en un sitio vivible. (Alonso & Alonso, 2015b: 94)

El movimiento organizado rechazó las elecciones que se querían hacer en Guerrero, pues buscaba nuevas formas de gobierno que no incluyeran a los políticos corruptos. El objetivo primordial era impulsar la creación de asambleas populares como una vía de unificación social autónoma desde abajo. Se requería el apoyo de todas las comunidades para alcanzar la libertad que le había sido arrebatada al pueblo de México. El movimiento comenzó a hermanarse con las luchas de los oprimidos de todo el país al tiempo que las acciones con repercusión internacional se intensificaban. El resultado fue la creación de la Asamblea Nacional Popular (ANP), encabezada por los padres de los 43 normalistas y conformada por diversas organizaciones sociales, sindicatos (como CNTE, STRM, SME), colectivos y alumnos de varias escuelas normales rurales populares.

Entre las acciones derivadas de la ANP se encuentra la creación de gobiernos autónomos y el sabotaje durante las jornadas electorales. Las acusaciones contra el gobierno por ser los criminales detrás de los hechos en Iguala han sido permanentes y seguirán vigentes hasta que no se haga justicia y se esclarezcan los hechos.

La ola de indignación de la sociedad civil internacional frente a los hechos de la barbarie ocurridos en septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero, son una muestra de hartazgo acumulados tras décadas de reformas económicas antipopulares, del crecimiento de la desigualdad, de la mutilación de derechos de ciudadanía, de la imposición de varios fraudes electorales, de la incesante y creciente violencia de Estado y, entre otros, de la crónica corrupción e impunidad que caracteriza al sistema político mexicano. (Ceja, 2015: 27)

Las acciones del movimiento tenían distintos objetivos. Las marchas no eran para pedirle algo al gobierno sino para denunciarlo como criminal. La relación con los otros movimientos sociales y formas de resistencia existentes en el país lo fortalecían

al crearse una red de movimientos que no permitiría que Ayotzinapa fuera diluido fácilmente. El plan de sabotaje de las elecciones en el 2015 con el llamado al abstencionismo, si bien demostró la posición del movimiento, bloqueó una vía de acceso hacia una transformación institucional. La división de las izquierdas es uno de los males que ha aquejado al país desde la dictadura priista. Muchos estudiosos ven la unificación de la izquierda social con la izquierda política como una vía de cambio, sin embargo, los padres de Ayotzinapa estaban hartos de las falsas promesas de los partidos políticos: la vía de la participación política institucional quedó sellada. No visualizaban las posibilidades de cambio «como una muda de gobierno sino una transformación de relación, donde el pueblo mandara y gobierno obedeciera» (Alonso & Alonso, 2015b: 167).

Precisamente fue la relación del Ayotzinapa con los zapatistas la que marcó al movimiento como algo novedoso, como una nueva forma de participar en la vida pública del país. Del aprendizaje de la experiencia zapatista y de los diálogos que se entablaron con los padres de los desaparecidos de Ayotzinapa surge la idea de llevar a cabo «un resquebrajamiento constructivo en otra dirección a lo acostumbrado por lo que habría que reconocer (en el movimiento por Ayotzinapa) algo diverso a la lógica del sistema, por pequeño que sea, que quebranta la dominación» (Alonso & Alonso, 2015b: 208).

Aprendizaje social y nuevas formas de participación

Con Ayotzinapa, México entra en una nueva era de la acción social. Es la crisis económica global y el deterioro de la legitimidad de la democracia tradicional y de los intermediarios políticos, como los partidos y los grandes medios de comunicación masivos, lo que ha favorecido el auge de este nuevo ciclo. En el caso del Ayotzinapa, la utilización de tecnologías de la información y de las redes sociales, la proyección hacia el exterior del país y la utilización de mecanismos que posibilitan un activismo transnacional que parte de medidas locales, mas no localistas, incrusta al movimiento en el nuevo ciclo de protesta social que se ha abierto en América Latina. Este nuevo ciclo se basa en la construcción de redes de movimientos, trasciende las luchas particulares al conectar proyectos y resistencias (Bringel y Cabezas, 2014). Son nuevos movimientos de larga duración

que generan nuevas esferas públicas en las que el contacto producido por la red permite nuevos marcos de negociación, la planificación táctica y, sobre todo, la generación de emociones que alimenten la participación de otros movimientos (Bringel & Cabezas, 2015).

Ayotzinapa ha sido un movimiento convergente con altas y bajas, pero después de casi dos años de su surgimiento sus ideales se mantienen. Con su surgimiento, sus estrategias y la conexión que se ha creado con otros movimientos, colectivos y organizaciones que surgen desde abajo, se ha puesto en marcha una nueva forma de integración latinoamericana, que si bien carece de líderes, cuenta con voceros de organización horizontal y autónoma, niega la hegemonía capitalista impuesta desde arriba y actúa desde lo local hacia el exterior.

Sin embargo, fueron los zapatistas los que predijeron el debilitamiento cuantitativo del movimiento hasta el punto de que los padres, siendo los únicos incansables, pudieran quedarse solos. Ante esta predicción, que con el pasar de los meses fue volviéndose una realidad, el movimiento continúa con unos pocos individuos comprometidos. El olvido ha invadido a muchos mexicanos. Aun así, la exigencia sigue vigente y la necesidad de justicia es de todos los ciudadanos del país, no solo de los padres de Ayotzinapa, pese a que sean ellos los que pongan el principal ejemplo de resistencia. De esto que el movimiento por Ayotzinapa tenga su especificidad en «cómo vive su propia autonomía, y en que no se agota en sus acciones de protesta, ni pretende perpetuarse por medio de una organicidad amplia» (Alonso & Alonso, 2015b: 218), sino que impulsa a que distintas poblaciones encuentren sus propias maneras de tomar decisiones sin la necesidad de depender del gobierno para hacerlo.

CONCLUSIONES

México es el país en el que la democracia —por voluntad política, por omisión y por los intereses de uno cuantos— es ficticia; en el cual, todas las instituciones están minadas por la corrupción y en donde la impunidad es síntoma de una crisis política. La guerra contra el narco fue un arma de doble filo que sirvió para legitimar al gobierno de Felipe Calderón, que llegó a Los Pinos por medio de un fraude electoral y que, al mismo tiempo, aterrorizó a la población e impidió que existiera

una respuesta social organizada y auténtica por parte de los ciudadanos. Decenas de miles de muertos relacionados con la política de seguridad de Calderón, desapariciones, secuestros y detenciones injustificadas fueron las armas con las que el panista se defendió de la población.

Sin embargo, en ese escenario desolador para los ciudadanos, la acción colectiva fue la única forma de incidir de manera real en la política de un régimen que se presumía democrático, pero en el cual la representación y los partidos no funcionaban y que no era capaz, ni quería, respetar las garantías de los ciudadanos. En 2001, el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad rompió el silencio ciudadano y salió a las calles, devolviéndole la voz a las víctimas y recordándole al gobierno que es a los ciudadanos a quienes tiene que escuchar y a ellos a los que debe representar; aunque el cinismo de Calderón «metió a la congeladora» las propuestas de las víctimas, y con ello su clamor fue reprimido, por lo menos durante el resto de la administración calderonista.

Con la llegada de Enrique Peña Nieto a la presidencia en 2012 se vislumbraba un retroceso en cuanto a los intentos por instaurar la democracia en nuestro país, pero lo que sucedió fue mucho más allá de lo previsto. Las reformas antipopulares de Peña Nieto, en complicidad con los partidos de oposición, el aumento de la desigualdad económica y social en el país y los altos niveles de inseguridad a causa del crimen organizado dejaron totalmente desprotegidos a los ciudadanos. La estrategia que Calderón había iniciado tuvo continuidad con Peña Nieto, logrando que el desconcierto social creciera a tal grado que los lazos de solidaridad y comunidad que unían a los mexicanos fueran desvaneciéndose de manera vertiginosa.

La corrupción de las instituciones de gobierno por parte del crimen organizado es otro factor que atacó directamente el bienestar de los ciudadanos, específicamente a partir de la infiltración del narcotráfico en las fuerzas armadas y policiales del país. La indefensión de los mexicanos era evidente, la crisis insostenible y el desconcierto insoportable. Las vías de acceso a la justicia estaban prácticamente selladas, sobre todo, para los grupos más vulnerables, para los de abajo.

La forma en la que se organizó el movimiento de Ayotzinapa fue la prueba del hartazgo de la política tal y como se conoce en

México, pues además de la búsqueda de los desaparecidos, buscó devolverle al pueblo la autonomía y la soberanía que a este le pertenecen. Una forma de acción social sin precedentes nació en México y se expandió por el mundo.

A más de un año y medio de los terribles sucesos en Iguala vemos también la reducción del movimiento. Su descalificación y los intentos de beneficiarse de él han sido recurrentes. Los padres sufren de sabotajes en los lugares donde acuden a dialogar con los ciudadanos y los niveles de convocatoria son cada vez menores. Por su parte, el Estado ha apostado desde un principio al olvido, a la continuidad de la impunidad. Al mismo tiempo, la lucha sigue en pie a pesar de que el movimiento ha tenido algunos errores tácticos. Los aciertos y aportes de Ayotzinapa son sobresalientes:

- representa una alternativa de participación política;
- representa una respuesta a la crisis civilizatoria;
- reactivó la participación social;
- hay mayor vigilancia nacional e internacional por el Estado de derecho;
- disipó la niebla de la guerra en México.

Ayotzinapa surgió como una fuerte protesta de indignación y se transformó hasta convertirse en un movimiento social de nueva generación, en una escuela para la práctica política desde abajo, en un espacio de convergencia que le dio voz a los múltiples movimientos del país y del mundo en contra de la dominación capitalista. Este movimiento le quitó la máscara a las instituciones detentadoras del poder, descubriéndolas como el principal opresor del pueblo. En la actualidad, persisten las campañas en contra de activistas en defensa de los derechos humanos, las desapariciones de jóvenes, la impunidad, la violencia de género y la criminalización de la protesta social continúa siendo una herramienta de control estatal. Ante esto, Ayotzinapa y la valiente lucha de los padres de los desaparecidos, es uno de los ejemplos más claros de resistencia de este siglo. Es responsabilidad de los ciudadanos aprender de él, hacer frente a los embates del sistema opresor, resistir y crear nuevas formas de convivencia que hagan poco a poco de este mundo un lugar mejor.

BIBLIOGRAFÍA

- AGUILAR, R. & CASTAÑEDA, J. (2012). «La guerra antinarco, el gran fracaso de Calderón». En: *Proceso*, 17 de octubre de 2012. Consultado en: <http://www.proceso.com.mx/322831/la-guerra-antinarco-el-gran-fracaso-de-calderon>
- ALONSO, C. & ALONSO, J. (2015a). «Para seguir los rastros de los movimientos a inicios de la segunda década del siglo XXI». En: *Espiral. Estudios sobre Estado y Sociedad*, XXII (62), pp. 9-42.
- _____ (2015b). *Una fuerte indignación que se convirtió en movimiento: Ayotzinapa*. México: Universidad de Guadalajara/ Unidad de Apoyo a las Comunidades Indígenas.
- AZIZNASSIF, A. (2013). «El retorno del PRI». En: *Desacatos*, núm. 42, mayo-agosto 2013, pp. 7-13.
- BRINGEL, B. & CABEZAS, M. (2014). «Geopolítica de los movimientos sociales latinoamericanos: espacialidades, ciclos de protesta y horizonte de posibilidades». En: Preciado, J. (2014) (Coordinador). *Anuario de la Integración Latinoamericana y Caribeña. 2011*. Guadalajara: Ediciones de la Noche, pp. 323-342.
- _____ (2015). «América Latina en la geopolítica de la indignación global: movimientos-red y corporalidad de la acción». En: Preciado, J. (Coordinador). *Anuario de la Integración Latinoamericana y Caribeña. 2012*. Guadalajara: Ediciones de la Noche, pp. 413-432.
- CEJA, J. (2013). «Violencia policial, derechos humanos y criminalización de la inconformidad organizada en México». En: Romero, S. (Coordinador). *Identidades, resistencias y propuestas civilizatorias en América Latina*. México: Editorial Ciencias Sociales, pp. 189-219.
- _____ (2015). «Violencia estructural, impunidad y movimientos sociales. El retorno del (nuevo) PRI y el caso Ayotzinapa». En: Medina, I. y Ruiz, J. *Política y sociedad en América Latina. Una mirada multidisciplinar*. Buenos Aires: *elaleph.com*, pp. 27-56
- ISLAS, M. (enero-junio 2016). «La lucha por la democracia y el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad». En: *Contextualizaciones Latinoamericanas* Año 8, Núm. 14.
- TILLY, C. & WOOD, L. (2009). *Los movimientos sociales, 1768-2008. Desde sus orígenes a Facebook*. Barcelona: Crítica.
- TURATI, M. (2012). *Fuego cruzado. Las víctimas atrapadas en la guerra del narco*. México: Grijalbo/Proceso.